

## EDITORIAL

# Nueva alza de la luz

Este 1 de julio se aplicará un nuevo ajuste semestral a las boletas de electricidad, que añadirá en promedio otro 7% a la tarifa regional. El golpe será más duro en comunas como Los Ángeles, Concepción y Talcahuano, donde la cuenta acumulada desde junio de 2024 ya bordea un 74%, con un aumento por kWh que ha despegado desde \$166 hasta \$289. Para un consumo típico de 180 kWh mensuales, eso significa alrededor de \$17.000 adicionales justo en pleno invierno.

El congelamiento de los precios decretado tras el estallido social de 2019 y prorrogado en pandemia evitó una disconformidad mayor, pero generó una deuda pública con las generadoras que supera los US\$6.000 millones. Para saldarla, el Congreso aprobó en 2024 la Ley de Estabilización Tarifaria (PEC 3), que reactivó las alzas y sumó un recargo que se cobrará —sin falta— hasta 2035.

El problema es que el calendario terminó siendo más extenso que el prometido. “El ministro dijo que serían tres alzas, pero en realidad son cuatro”, recuerda Javier Piedra Fierro de la Fundación Energía para Todos.

El 7% aplicado hoy se explica en un 2% por el alza en el precio del dólar, dado que los contratos eléctricos se pagan en dicha moneda; otro 2% corresponde a la inflación estadounidense y el encarecimiento de los combustibles, especialmente el gas, que duplicó su valor entre octubre y enero; y el restante 3,1% corresponde a cobros pendientes de 2024 que no alcanzaron a aplicarse. Sin embargo, los montos varían según la distribuidora y Los Ángeles, que tiene cuatro empresas distintas, se enfrenta a estructuras de costos dispares.

El Gobierno afirma que entramos en una “normalidad tarifaria” en la que los precios se ajustarán dos veces al año “según el comportamiento del tipo de cambio”, como explicó el ministro de Energía, Diego Pardow. Pero esa normalidad llega cuando los salarios reales siguen estancados y la inflación local no cede.

Para contener el golpe, La Moneda desplegó un subsidio eléctrico que hoy alcanza a 1,8 millones de hogares vulnerables y que promete ampliarse a electrodpendientes, comités APR y MiPymes. “Estamos fortaleciendo el subsidio y promoviendo soluciones estructurales, como sistemas solares comunitarios”, subraya el seremi de Energía del Biobío, Danilo Ulloa, pero la solución parece no satisfacer.

Alcaldes de todo el país han pedido al Ejecutivo abrir una mesa para renegociar los contratos más antiguos con las generadoras. Desde la sociedad civil, la Fundación Energía para Todos lidera una campaña que busca actualizar los convenios firmados hace más de una década y, con ello, recortar hasta un 11% la tarifa final. Tal alternativa evitaría seguir conteniendo el alza con subsidios que, obviamente, se financian con impuestos.

El asunto es paradójico para Chile, que aspira a liderar la transición energética en América Latina, dado que mantiene una de las tarifas residenciales más altas de la región. Sin un pacto amplio que combine eficiencia, generación renovable distribuida y renegociación contractual, el costo de la transición recaerá sobre las personas que menos margen tienen, y ese malestar también se acumula.